

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

PROCESO	ORDINARIO
DEMANDANTE	José Mario Jiménez
DEMANDADO	Colpensiones
PROCEDENCIA	Juzgado 05 Laboral del Cto. de Medellín
RADICADO	05001 3105 <b>005 2018 00431</b> 01
INSTANCIA	SEGUNDA
PROVIDENCIA	SENTENCIA Nro. 119 de 2021
TEMAS Y SUBTEMAS	Incrementos pensionales- persona pensionada con Ley 797 de 2003, no tiene transición- no incrementos
DECISIÓN	Confirma

En la fecha, **treinta (30) de junio de dos mil veintiuno (2021)**, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral integrada por los magistrados: Martha Teresa Flórez Samudio, Orlando Antonio Gallo Isaza y Luz Amparo Gómez Aristizábal, procede a emitir pronunciamiento en relación con el grado jurisdiccional de consulta en favor del señor **José Mario Jiménez**, frente a la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito, dentro del proceso ordinario que promueve contra **Colpensiones**. Radicado único nacional 05001 3105 **005 2018 00431** 01.

La Magistrada ponente en acatamiento de lo previsto en el artículo 15 del Decreto 806 del 04 de junio de 2020, en concordancia con los Acuerdos del Consejo Superior y Seccional de la Judicatura, sometió a consideración de los restantes integrantes el proyecto, estudiado, discutido y aprobado en sala virtual mediante acta **Nº 021**, que se adopta como sentencia y se plasma a continuación.

## **Antecedentes**

Para lo que interesa a esta instancia, se tiene que el demandante pretende se declare que es beneficiario del régimen de transición, y, en consecuencia, que le asiste derecho al reconocimiento y pago de los incrementos pensionales del 14%, a partir de la fecha en que se le otorgó la pensión.

En sustento de ello, argumentó que nació el 19 de octubre de 1954, requiriendo el pago de la pensión de vejez el 20 de octubre de 2016, otorgada mediante Resolución GNR332199 del 16 de noviembre de 2016, a partir del 1º del mismo mes y año; que contrajo matrimonio con la señora Luz Elena Suarez Tamayo, el 8 de agosto de 1987, fecha desde la cual la misma depende económicamente de él; que solicitó el reconocimiento y pago de los incrementos pensionales, quedando agotada la reclamación administrativa.

En atención a lo decidido frente al conflicto de competencia suscitado frente a este proceso, en auto del 17 de enero de 2020, se admitió y ordenó dar trámite a la acción y debidamente notificada la demandada allegó respuesta, aceptando la fecha de nacimiento del actor, la de solicitud de la pensión, y la de matrimonio, así como lo relativo al reconocimiento y pago de la prestación en Resolución GNR332199, y la solicitud de incrementos pensionales, frente a los demás supuestos, esgrime no constarle. **Se opuso** a la prosperidad de las condenas al considerar que los incrementos pensionales fuera de que se encuentran afectados por el fenómeno extintivo de la prescripción, también fueron derogados con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, y así lo determinó la Corte Constitucional en sentencia SU-140 de 2019. Finalmente, formuló las excepciones que denominó:

inexistencia de obligación de pagar incrementos por personas a cargo, improcedencia de la indexación, compensación, prescripción, buena fe, imposibilidad de condena en costas, descuentos del retroactivo por salud, y la genérica.

La primera instancia terminó con **sentencia proferida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito**, en la que declaró probada la excepción de *inexistencia de la obligación de pagar incrementos pensionales por persona a cargo*; en consecuencia, absolvió a la demandada de las pretensiones incoadas en su contra, imponiendo condena en costas.

Argumentó el fallador que el actor no es beneficiario del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, al no contar con 40 años al 1º de abril de 1994, ni con 750 semanas de cotización a la misma fecha, así como tampoco con lo dispuesto en el Acto Legislativo 01 de 2005, al cumplir los 60 años en el 2016, no siendo dable darle aplicación a lo dispuesto en el Acuerdo 049 de 1990, y con ello el reconocimiento de los incrementos pensionales, indicando que, es un requisito indispensable que la persona se encuentre pensionada bajo dicha normativa para poderlos conceder, adicional a que, si bien la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral ha indicado que los mismos se encuentran vigentes, también lo es, que la Corte Constitucional en sentencia SU-140 de 2019, determinó que los incrementos fueron derogados por la Ley 100 de 1993, por tanto, tampoco es posible su otorgamiento.

Al ser la decisión totalmente adversa a los intereses de la parte actora, y no haberse formulado recurso de apelación frente a la misma, se conoce en el grado jurisdiccional de consulta en virtud de lo establecido en el artículo 69 del C.P.T y la S.S.

De la oportunidad para presentar alegatos hizo uso **Colpensiones**, esgrimiendo que de conformidad con lo dispuesto en la Sentencia SU 140 del 2019, los incrementos pensionales, quedaron orgánicamente derogados al momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, es decir, a partir del 1 de abril de 1994, por tal, las personas que adquirieron el derecho a la pensión en vigencia esta ley, aunque lo fuera aplicando el Decreto 758 de 1990, en virtud de la transición del artículo 36, no tienen derecho al citado incremento pensional.

En orden a resolver, basten las siguientes,

### **Consideraciones**

Como hechos debidamente acreditados en los autos se tienen: que el actor nació el 19 de octubre de 1954, otorgándosele la pensión de vejez en aplicación de lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 9 de la Ley 797 de 2003, en Resolución GNR332199 del 9 de noviembre de 2016; que contrajo matrimonio con Luz Suarez Tamayo el 8 de agosto de 1987.

Así las cosas, el **problema jurídico** en esta instancia, se circunscribe a establecer si el demandante acredita las exigencias para consolidar su derecho pensional al amparo del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año, así como si es dable el reconocimiento y pago de los incrementos pensionales del 14% establecidos en los artículos 21 y 22 del Acuerdo 049 de 1990.

Pues bien, debe decirse que el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 estableció dos formas de acceder al régimen de transición: edad o

tiempo de servicios. Esas condiciones fueron disyuntivas. Así, para el primer evento, la norma previó que tienen derecho al régimen de transición las personas que tuvieran 35 o más años de edad, en el caso de las mujeres y 40 o más años de edad, en el de los hombres; en el segundo, tener 15 o más años cotizados o servidos. En las dos situaciones, se puede alcanzar la pensión de vejez o de jubilación con los requisitos de edad, tiempo de servicios o número de semanas cotizadas y monto del régimen que se les venía aplicando con anterioridad al 1º de abril de 1994 para los trabajadores privados.

Ahora, de acuerdo con la prueba obrante en el plenario, se tiene que el actor no satisface ninguno de esos requisitos, en tanto, al haber nacido el 19 de octubre de 1954, para la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, 1 de abril de 1994, acreditaba 39 años, adicional a que para la misma calenda no contaba con 15 años de servicio o 750 semanas de cotización tal y como se desprende de la historia laboral y la Resolución GNR 332199, sin que sea posible entonces entrar a establecer si acredita o no los supuestos del Acto Legislativo 01 de 2005, pues, este simplemente se expidió a fin de establecer pautas para la conservación del régimen de transición hasta el 2014, para las personas que hubiesen cumplido los requisitos exigidos por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Finalmente, frente al reconocimiento y pago de los incrementos pensionales consagrados en el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, es de indicar, que el otorgamiento de los mismos solo es posible frente a personas a las cuales se les reconoce la pensión de vejez en aplicación de lo establecido en dicha normativa, supuesto, que no se advierte para el caso, pues, tal y como ya se explicó el demandante no es beneficiario

del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y por tal, el otorgamiento de la pensión que realizó la demandada atendiendo lo regulado en la Ley 797 de 2003, se encuentra acertado.

Y si en gracia de discusión se tuviera que el actor es beneficiario del régimen de transición, tampoco sería dable el otorgamiento de los incrementos, en tanto, la Corte Constitucional en la sentencia **T-456 de 2018** y **SU 140 de 2019** pregonó la improcedencia de tal beneficio cuando el afiliado adquiere el derecho pensional con posterioridad a la expedición de la Ley 100 de 1993, así se reconozca bajo los postulados del régimen de transición en aplicación del Acuerdo 049 de 1990 aprobado Dto. 758, en tanto, los mismos, según lo expresado en la sentencia SU 140 de 2019 fueron orgánicamente derogados a partir de la vigencia de la Ley 100 de 1993, al haber regulado esta de manera íntegra y exhaustiva lo relativo a las pensiones, disponiendo la ultractividad solo de unos determinados aspectos del sistema pensional anterior, para ciertas personas y por cierto tiempo, protegiendo las expectativas legítimas de tales afiliados, beneficios estos referidos exclusivamente a la adquisición del **derecho a la pensión**. Así, la garantía del artículo 36 de la Ley 100, solo contempla tres bondades específicas " *i) la edad para consolidar el derecho a la pensión de vejez, ii) el tiempo de servicio -o número de semanas cotizadas-, y iii) el monto de esa prestación*", sin que el incremento pensional sea constitutivo del monto, y sin extenderse algún derecho extra pensional accesorio de dicha pensión, máxime cuando los incrementos que prevé el artículo 21 del Decreto 758 de 1990 no fueron dotados de una naturaleza pensional por expresa disposición del artículo 22.

Así las cosas, al determinarse que el beneficio del aumento en la mesada pensional del artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado

por el Decreto 758 del mismo año fue orgánicamente derogado con la entrada en vigencia del sistema general de pensiones regulado en la Ley 100 de 1993, y no hace parte de los beneficios del régimen de transición, el cual solo salvaguardó del régimen anterior lo atinente a la edad, monto y semanas, y sin que dicha prerrogativa constituya un derecho adquirido conforme al Acto Legislativo 01 de 2005, en tanto, ni los consagró ni hizo mención a ellos, no es dable su aplicación si no para los casos en los que el derecho se consolida en vigencia del régimen general del seguro social, y en tal medida no se tiene por esta Sala la facultad para reconocer unos beneficios que, se reitera, al haber sido orgánicamente derogados, su reconocimiento sería violatorio del principio de legalidad, criterio que ha sido acogido por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral en las sentencias SL2179 de 2020 y SL2061 de 2021, luego, dable resulta confirma la sentencia de instancia.

Sin costas en esta instancia al analizarse la decisión en el grado jurisdiccional de consulta.

En mérito de lo expuesto, la **Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín**, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **confirma** la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito dentro del proceso ordinario promovido por **José Mario Jiménez**, en contra de **Colpensiones**.

Sin costas en esta instancia al analizarse la decisión en el grado jurisdiccional de consulta.

Lo resuelto se notifica a las partes por **estados virtuales**, artículo 295 C.G. del P. en concordancia con el 15 del Decreto 806 de 2020.

**Los magistrados** (firmas escaneadas)

  
**LUZ AMPARO GOMEZ ABISTIZABAL**  
Magistrada

  
**MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO**  
Magistrada

  
**ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**  
Magistrado

**Certifico:** Que el auto anterior fue notificado por **ESTADOS No. 114** fijados hoy en la secretaría de este Tribunal a las 8:00 a.m. Medellín, **01 de julio de 2021.**

\_\_\_\_\_  
Secretario